

Iconos. Revista de Ciencias Sociales
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
revistaiconos@flacso.org.ec
ISSN (Versión impresa): 1390-1249
ECUADOR

2001
Jorge León T.
CONFLICTO ÉTNICO, DEMOCRACIA Y ESTADO
Iconos. Revista de Ciencias Sociales, abril, número 010
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Quito, Ecuador
pp. 48-56

Conflicto étnico, democracia y Estado

Jorge Leon T.*

Ecuador acaba de vivir, con los actos de protesta de enero y febrero de 2001, un acto colectivo más, de los varios que conoce desde 1978 con el regreso al régimen constitucional. La protesta es parte de su sistema político aún más en el régimen democrático, incluido en sus momentos de "democradura" (1984-1988). En contraste con lo acontecido antes de los 90, son las organizaciones indígenas y campesinas las protagonistas principales, es un predominio rural, más no los sindicatos, un predominio urbano. Igualmente, de un movimiento de identidad, en el cual predominaron los aspectos étnicos, tanto por sus actores como por sus objetivos, sus metas y sus acciones, estos actos colectivos encabezados por los indígenas se han transformado, incorporando explícitamente aspectos de clase. Estos están en juego en las actuales decisiones públicas, en particular, en relación con las políticas de ajuste promovidas por el Fondo Monetario Internacional y las reformas del Estado. Son actos de rechazo a los impactos negativos del actual proceso de internacionalización llamado globalización.

En un texto anterior hemos llamado la atención sobre que esta situación se explica más por el sistema político ecuatoriano que por los actores de la protesta, sin que se desmerezca ni minimice el rol de las personas que protestan¹. Ecuador es una excepción en América Latina por este tipo de actos de protesta, tanto por su persistencia como por sus impactos públicos. Entendemos que no son características particulares de los actores las que permiten comprender la excepción, sino el sistema polí-

tico el cual, por lo demás, se encuentra en plena mutación con diversas reformas políticas y cambios sociales de largo plazo que modifican los equilibrios regionales que están a la base de este sistema. Esta es una de las crisis que caracteriza al Ecuador actual. Este tipo de protesta se volvió una pauta establecida con los sindicatos. Los indígenas la han modificado siguiendo sus peculiaridades de movilización, de metas, de significados, de sus rituales, etc. Los fenómenos de protesta deben ser analizados en retrospectiva.

De los diferentes componentes que según nuestro análisis caracterizan a los actos de protesta: acciones, actores, oponentes, "lo que está en juego", objetivos y contexto, aquí llamo la atención únicamente sobre algunos elementos sobresalientes o que contrastan con el pasado: primero, sobre diferentes actos de movilización y sus actores; segundo, en relación con la construcción de lo que es inadmisibles y da justificativos para la protesta; tercero, sobre las reacciones a los actos por parte de los no-indígenas, pues este acto se sitúa también en la dinámica étnica, a más de la de clase y ciudadana, polos sociales que ahora ponen de relieve los actores principales del acto colectivo; finalmente un aspecto institucional relacionado a los militares.

Acciones de movilización y actores

La movilización de los últimos días ha sorprendido a todos, incluso a los dirigentes de las organizaciones indígenas. Conviene diferenciar las acciones en el contraste ya habitual de dos niveles, entre lo local y lo propio de la escena "nacional". Por lo general, las informaciones sobre las movilizaciones indígenas no dan cuenta de su dinámica y fuerza al nivel local, generalmente predominan las informaciones sobre los acontecimientos al nivel nacional. Este fenómeno fue todavía más marcado en esta oca-

* Centro de Investigaciones sobre los Movimientos Sociales del Ecuador, CEDIME.

1 "El contexto y el sistema político en el movimiento indígena ecuatoriano" (pronta publicación en el IEP, Lima).

sión, puesto que la prensa no transmitió muchos de los acontecimientos que ocurrían al nivel local. Incluso, hubo una invitación de las autoridades a la autocensura de la prensa, lo que en cierto modo produjo una reducción de las informaciones. El nivel local, fue el principal escenario de las movilizaciones. Son las organizaciones de primero y segundo grado las que rebasaron a los dirigentes de tercer grado, tomando iniciativas, movilizándose por su cuenta, ocupando los espacios locales. Los dirigentes nacionales se encontraron con una serie de actos e iniciativas locales que ellos no habían promovido y que los ponían ante situaciones de hecho. En varios aspectos, se revivió lo acontecido en 1990 cuando se privilegió ocupar el espacio local, de las cabeceras cantonales o provinciales. Sobre todo en Chimborazo y Cotopaxi. En contraste con 1990, esta protesta integra a casi todos los sectores sociales rurales; en particular, sobresale la acción conjunta de evangélicos y católicos, generalmente en competencia y mutuamente opuestos, y de otros sectores, considerando que la diversidad indígena es mayor de la que generalmente se concibe. Estos dos aspectos ya permiten percibir unas primeras conclusiones: a más de un cambio en los actores, nos enfrentamos a un conflicto social muy fuerte, que rebasa las direcciones de las organizaciones al nivel nacional. La importancia de la protesta o del rechazo es tal, que logra integrar a todos y llega a fuertes movilizaciones locales. Sobre el proceso de cambio de los actores, en marzo pasado en Colta, ya constatamos los acelerados cambios de los evangélicos hacia la acción política de protesta y a la constitución de razones sociales diversas para una afirmación colectiva que llevaba a la búsqueda de un espacio público propio, inclusive para ratificar su objetivo de llegar a una teología indígena, de suplemento ecuménica.

La importancia de la protesta, sin embargo, no fue únicamente rural ni indígena, esta se inició en enero a nivel urbano. Ante el predominio del protagonismo indígena, se llega a olvidar, en las versiones de prensa y en los análisis, que este acto colectivo comenzó primero con la protesta callejera realizada por los estudiantes, y luego por los sindicatos en varias ciudades, pero sobre todo en Quito y Cuenca, a raíz de las nuevas medidas de ajuste que tomó el gobierno a fines de diciembre, sobre todo

con una alza sustantiva del precio del gas doméstico, de los combustibles y del transporte. La CONAIE no estuvo dispuesta, a un inicio, a este acto de protesta. La magnitud y persistencia de esta protesta son notorias en las acciones públicas en Cuenca, que se mantuvieron hasta el fin.

La construcción del descontento y de lo inadmisibles

Las movilizaciones se dieron de modo progresivo y aumentaron en respuesta a la política de represión del gobierno. La represión, lejos de provocar un desánimo para movilizarse o un encierro de las organizaciones indígenas, creó indignación y llevó a una manifestación de rechazo hacia esta decisión del gobierno. Otra conclusión inmediata de estos hechos es, en primer lugar, la existencia de un contexto marcado por un generalizado rechazo a situaciones consideradas inadmisibles a varios niveles, y en segundo, la importancia del proceso que viven las poblaciones indígenas en términos de afirmación colectiva y, paralelamente, de construcción de un espacio local que ahora se lo considera como propio. La represión no le atemorizó ahora.

Hay varias razones que explican cómo se construye la indignación. Sin duda, la crisis y la represión contribuyen, pero es un fenómeno un poco más amplio en una población que está adquiriendo la idea del derecho propio. Ahora la población indígena construye su propia identidad amparada, en buena parte, en la idea de que tiene una serie de derechos que le han sido negados. Todo este proceso de afirmación colectiva se traduce en una fuerte capacidad de convocatoria y de movilización al nivel local.

Llama también la atención la radicalidad de los medios utilizados por la gente durante la protesta. Desde 1990 se repite el ritual de lo que hemos llamado la ocupación del espacio del "otro", el mundo urbano, de la cabecera parroquial a la cantonal o a la provincial, y en los subsiguientes levantamientos fue la capital del país. Estos ya fueron precedidos, desde luego, por la llegada a la casa del gobierno por los dirigentes que negociaron con el entonces presidente Borja en 1990; luego, por una marcha de poblaciones amazónicas a Quito en de-



A más de un cambio en los actores, nos enfrentamos a un conflicto social muy fuerte, que rebasa las direcciones de las organizaciones al nivel nacional. La importancia de la protesta o del rechazo es tal, que logra integrar a todos y llega a fuertes movilizaciones locales

manda de territorios. Se trató de la ocupación de espacios vedados a los indígenas como los parques principales, coliseos, gobernaciones, etc. Ahora, en 2001, fue ya no solo bloqueos, ocupaciones de edificios públicos, sino privación de ciertos servicios al resto de la sociedad. Pero además de todo eso, una intención clara de ratificar la ocupación de un espacio mayor que el local, en el que normalmente se le ha querido recluir a la población indígena.

Las movilizaciones tuvieron mucha fuerza en las provincias centrales de Chimborazo y Cotopaxi, primero, luego en Bolívar y Tungurahua, más tarde en Imbabura, y finalmente en Napo. En el caso de Napo, hay que subrayar la virulencia de la protesta, lo cual exige una explicación más profunda.

Respecto de las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, quisiera subrayar el hecho de que son dos zonas en donde el espacio de tierra está cada vez más reducido, las economías familiares dependen cada vez más de los ingresos externos, de ahí que las medidas que tomó el Gobierno sean particularmente sentidas. El costo del gas y el transporte, recordemos, cuenta mucho en la economía familiar, sus elevaciones provocan reacciones muy fuertes. En Imbabura igualmente, la población que se movilizó, no fue tanto la artesana sino la campesina, sobre todo la de las zonas de altura.

En cuanto a la movilización al nivel nacional, se ha vuelto una constante la idea de organizar una marcha hacia Quito para ocupar los espacios de la ciudad. Es una tendencia un poco universal de los diferentes movimientos de protesta y de los movimientos sociales que buscan rebasar el espacio local, para proyectarse sobre un espacio más amplio, el nacional. Con las marchas hacia Quito, los indígenas han encontrado un excelente medio de llamar la atención y ratificar su importancia política. Tiene mucho impacto la ocupación de los espacios y, además, tiene muchísima resonancia a nivel inter-

nacional por todas las noticias que se transmiten. Es parte del proceso de globalización de la protesta. Se va al lugar en el que se adquiere mayor legitimidad política, ahí en dónde se encuentra el poder decisorio.

El conflicto social y étnico se está radicalizando. Ahora, la ocupación de los espacios, antes adscriptivamente propios a los mestizos, fue rebasada. Se intensificó, lo que había constatado en 1990 para Guaranda, con la multiplicación de uno de los tipos de relaciones étnicas, las de conflicto étnico abierto. Este conflicto no tiene la misma envergadura y características en todas partes. Aquí, se vivió el enfrentamiento clásico, con los cortes de agua a la población urbana. En los hechos de enero-febrero 2001, este acto se realizó en varias partes, además, en algunos lugares se cortó o se intentó hacer el corte del servicio de electricidad, y se buscó hacerlo con los teléfonos. Igualmente, otra vez, se ocupó las antenas repetidoras de las ondas de TV y radio entre la sierra y la costa, en Pilisurco, Tungurahua. Se multiplicaron las tomas como rehenes de policías y miembros del ejercito, en Tungurahua (Salasaca), Imbabura y Cotopaxi. Estos vivieron el ritual de castigo haciéndoles caminar largo, inclusive la noche, "para que conozcan las comunidades".

Estos diversos hechos muestran el incremento de la protesta cuando se presumía disminuiría luego de la dolarización, del cambio de gobierno y de los efectos de un golpe de Estado fallido por una facción militar junto con las principales organizaciones indígenas, hace un año. En nuestro análisis, la protesta se reanima por el impacto de las medidas de ajuste en economías ya debilitadas, pero igualmente por razones político morales. El límite de lo inadmisible se ha construido sobre diversos criterios: un contexto que se vuelve en su conjunto inadmisible para los criterios en vigor. A este contexto de lo inadmisible se incorpora el descontento

de las medidas de ajuste; y en el curso de la protesta, las políticas represivas causan indignación en una población que se valoriza ahora por los derechos. La construcción de las razones de injusticia, que alimentan la protesta, viene de una acumulación de frustración a raíz del golpe fallido, en el cual los principales perdedores son los indígenas y los ganadores han sido las cámaras, las cuales logran toda la legitimidad y posibilidad de hacer concretas sus propuestas y de seguir obteniendo prebendas. Los perdedores, a su vez, acumulan pérdida del poder de compra (la inflación acumulada en el primer año de la economía dolarizada llegó a 91%) e indignación por lo que podríamos llamar daños morales. Ello a pesar del hecho de que, en el sector indígena, predomina la idea que hubo un triunfo al demostrarse que los indígenas podían llegar al gobierno y que esto no es sino una cuestión de tiempo y de saber captar las oportunidades.

Los escándalos públicos se han multiplicado desde hace un año señalando que el gobierno, vía AGD (Agencia de Garantías de Depósitos) o propuestas de ley diversas, actúa como una hacienda en favor de un reducido sector pudiente, no únicamente el financiero. Justo antes de las medidas de ajuste, por ejemplo, el gobierno ya anunció la condonación de la deuda de las personas pudientes (debido al monto). Es, en todo ello, el Estado quien asume esas prebendas favorables al sector pudiente. Recordemos que el Estado para salvar al sector bancario ha asumido cerca de 3500 millones de dólares, equivalente a cerca de una cuarta parte de la deuda externa. Este contexto incrementa la pérdida de credibilidad y de legitimidad del gobierno, de la ley y del aparato de justicia. A su vez, el gobierno rechaza demandas de los indígenas o de otros sectores populares por montos de lejos inferiores, el costo de la subvención del gas oscilaría entre 60 y 90 millones, por ejemplo.

Los impactos económicos de la construcción de esta imagen de un gobierno en favor de las minorías pudientes, implican, para el sector indígena, que se vean coartadas sus posibilidades de mejorar su condición económica. Recién se inserta en el sistema y ya ve coartada su inserción y las posibilidades de funcionar en éste, al que tanto valoriza en la lógica de llegar a la equidad con los demás sectores. Resulta "inadmisible" la desigualdad de tratos. En

otros momentos este contexto no necesariamente llevaría a la movilización, cuanto más que existe cansancio de la protesta luego de meses de tensiones públicas. Pero se trata de una población en afirmación de derechos colectivos y en la necesidad de compensar esta frustración del golpe fallido. Conviene recordar que la pérdida de legitimidad de entonces, ha sido rápidamente reacomodada en las organizaciones indígenas para quién no hubo golpe, sino que "se cumplió un mandato popular de rebelión" ante tanto abuso e injusticia. Se tiene, así, una causa moral para el bien de todos. En nuestro criterio, por largo tiempo este referente de razonamiento pesará en el mundo indígena: "ya demostraremos que podemos, ¿por qué no ahora?" y "¿por qué el Estado debe ser sólo para ellos?".

Finalmente, es posible que la dimensión regional haya jugado en este acto colectivo al predominar en las decisiones públicas las propuestas e intereses de los sectores pudientes de Guayaquil, y al haber sido parte de las medidas favorables a este sector y reiteradamente consideradas inadmisibles por los dirigentes o no de este acto de protesta. Los indígenas asumirían una condena colectiva regional. En el caso del sector urbano, al menos este aspecto ha sido reiteradamente mencionado por las personas en protesta. Haría parte de lo moralmente inadmisibile.

En efecto, un aspecto significativo de la movilización es la persistencia y virulencia de la protesta en Cuenca, en donde se intensificaron movilización y violencia. Sin más, por ejemplo, se atacó un edificio público y se incendió un bus. Varias manifestaciones integraron a varios sectores sociales. Cuenca es, sin embargo, una de las raras ciudades en donde las condiciones económicas no han conocido la misma degradación económica que en el resto del país. Las entradas provenientes de los migrantes al exterior compensan el impacto de la recesión económica que vive el resto del Ecuador. Existen, sin embargo, otras razones que revelan una situación socialmente más compleja de la protesta o de la construcción de lo intolerable, propia a las protestas generalizadas. Cuenca está formada por un gran sector de capas medias y sobre todo, fruto de su modernización hace dos generaciones que hemos llamado "conservadora", por una mentalidad de sectores medios con una ethos cristiano, con di-

mensiones morales marcadas. Este hace parte de la identidad cultural de la región. No es un azar que uno de sus diputados sobresale por su rol en las denuncias contra la corrupción o que las campañas electorales en la región den mayor énfasis a la lucha contra la corrupción que en otros sitios del país. En los últimos años, en varias ocasiones, Cuenca ha sido un sonido de campana contra pautas de corrupción. Su obispo católico saliente, Luna Tobar, ya es un símbolo de rechazo a ésta y de la construcción de una crítica tanto al neoliberalismo como a la connivencia entre empresarios y gobiernos para alimentar la tradición rentista y de prebendas a su favor. Es la tradición de la provincia que ha incidido posiblemente en este rol del obispo. Estas posiciones coinciden con las que alimenta al movimiento indígena. Fue igualmente significativo el rol de Cuenca, junto con el resto de la Sierra y Quito, en particular, precisamente a través de la protesta, en los acontecimientos públicos que llevaron a la caída de Bucaram y de Mahuad. Cuenca ha jugado un continuum de protesta y de expresión de la sanción moral desde 1984. A más de esta dimensión político moral, la reducción de los niveles de vida y de las aspiraciones sociales, inclusive de su estatus, de amplios sectores medios, también puede explicar dimensiones de la protesta en la región.

En una dinámica diferente, pero convergente en la integración de parte de las clases medias no indígenas, a través de la protesta, se encuentra Ambato y sobre todo Guaranda. Sus protestas no fueron únicamente de indígenas. En Guaranda fueron, a la vez de indígenas, sobre todo rurales, y de urbanos no indígenas; esto en una ciudad que conoce la confrontación de estos dos sectores con ahínco y con un largo pasado, explícito o no. Es decir, existe un contexto de descontentos que no conciernen únicamente a los indígenas, ni es sólo en relación con la situación económica o a la política. La protesta traduce una crisis general del Ecuador. Con anterioridad hemos formulado precisamente la hipótesis que el Ecuador vive varias crisis que se superponen, por ejemplo, aquella de su alineamiento al mundo exterior y que acelera los conflictos regionales, con aquella de cambios socioeconómicos de largo término que modifican sus tradicionales equilibrios regionales, y consiguientemente, de su crisis política al no funcionar como antes sus

canales de construcción de acuerdos políticos o sociales².

Igualmente, tanto en los sectores indígenas como no indígenas, las acciones de protesta, muestran que la caída del Estado tiene incidencias mayores. Es visible no únicamente en la virulencia de las poblaciones en protesta o en el incremento de la violencia, sino también en la ausencia de autoridades locales. Éstas no tienen legitimidad o reconocimiento, no sólo en relación con un referente de orden social, sino por su ausencia o incapacidad de ser interlocutoras (¿a quién o a qué pueden representar si el Estado funciona como hacienda de pocos?). Este aspecto obtuvo ribetes de nuevo ritual público con la destitución de tres gobernadores (representantes del ejecutivo en las provincias) y el nombramiento de otros paralelos, por las personas en protesta. A más de revelar la concepción indígena de verse como colectividad en alter al Estado, indica la pérdida de legitimidad de la autoridad y el vacío de poder de ésta al nivel local. Es igualmente perceptible en las quejas diversas de los contestatarios de no tener más agentes del Estado que ofrezcan créditos, ayuda técnica o contribuyan a la producción, etc., como antes lo hacían. Los actos y los discursos indican un vacío de poder ante la caída del Estado, lo que ha sido una de las reformas llamadas neoliberales. La protesta puede ser vista igualmente como un rechazo a éstas. Los escenarios de protesta y de los actos colectivos, configuran condiciones y situaciones sociales predominantes. En este caso, llamó la atención que nadie tenía el control de nada. Ni la CONAIE, ni las autoridades locales, ni las nacionales, ni las fuerzas del orden. Predominó la espontaneidad y el no-control en una región, la sierra, caracterizada por ser orgánica. El vacío del poder, dejado por el Estado, se presenta en un contexto en el cual ha jugado un rol múltiple de articulador del poder local, de promotor de desarrollo, de integrador de diversidad social en un país con fuerte heterogeneidad social y conflictividad étnica. La brusca reducción del Estado permite que las dinámicas sociales conflictivas como las

2 María Fernanda Cañete (comp.) *Las crisis ecuatorianas: sus bloqueos económicos, sociales y políticos*. Quito, CEDIME-IFEA, 2001.



Ecuador vive varias crisis que se superponen: aquella de su alineamiento al mundo exterior y que acelera los conflictos regionales, aquella de cambios socioeconómicos de largo término que modifican sus tradicionales equilibrios regionales y su crisis política al no funcionar como antes sus canales de construcción de acuerdos políticos o sociales

clásicas, de confrontación étnica y de clase, se exacerbaban y pasaban del acuerdo al enfrentamiento.

El cierre de la apertura étnica

El otro tema sobresaliente en los hechos colectivos ha sido lo que he llamado el cierre de la apertura étnica. En efecto, Ecuador es uno de los países de América Latina que ha dado mayor cabida a la población indígena dentro del sistema político. Hemos logrado, por ejemplo, incorporar al nivel de la Constitución la idea de los derechos colectivos, a la vanguardia de América Latina.

Esto no es fruto del azar, sino resultado de un largo proceso que se viene dando desde los años post-reforma agraria. Desde entonces se produjo lo que yo he llamado apertura étnica, en el sentido concreto de que los indígenas lograron mejores espacios en las entidades locales de decisión, como también ventajas socioeconómicas que no han logrado en otras sociedades. Hemos modificado los espacios de las relaciones étnicas y buena parte del éxito consistió en que se hizo sin mayores conflictos. En nuestro caso, fue el mismo estado ecuatoriano el que diseñó una serie de políticas agrarias que en parte beneficiaron a la población indígena.

Esta apertura, como todos los fenómenos sociales, tal la legitimidad, o la misma protesta, tiene un tiempo, una duración, son procesos con ciclos. En nuestra hipótesis el ciclo de la apertura terminó en el Ecuador contemporáneo. Hay una historia ocurrida en 1994 que traigo a la memoria como hecho simbólico de lo que estoy planteando. Entonces fue incendiada la casa de la Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar (UPCCC), que fue antes el hospital público de la región y el edificio

más importante fuera de la iglesia en la ciudad, casi el símbolo del espacio urbano, allí, con la apertura étnica a la que aludo accedió y estaba consagrada la organización indígena. Unos meses antes de que el sector urbano lo quemara, había entrevistado a los dirigentes del Municipio y una de los aspectos que remarcaron fue que estaban cansados de que solo se hicieran programas para los indígenas. "El municipio no tiene plata, por qué se les da solo a ellos, hay también mestizos pobres", decían. Aparecieron así los esquemas mentales de este conflicto étnico que ha durado desde la colonia. La crítica de los dirigentes, del alcalde y concejales mostraba que se estaba llegando a un límite. Meses después, hubo un acto de protesta, similar a la actual, en el cual los indígenas de la zona participan. En respuesta, la gente de la ciudad termina con el incendio de la UPCCC, heridos y confrontaciones muy fuertes. Para mí, ese fue un primer indicio público de que se cerraba el espacio de apertura étnica. Algo similar encontré, meses después, en la provincia de Bolívar, en Guaranda. En mi hipótesis este fenómeno social no se agudizó, sino que se atenuó o inclusive "retrocedió" debido al juego político en el cual la protesta -y en ésta los indígenas- adquiere legitimidad ante la crisis ecuatoriana.

Ha sido particularmente notorio, en este último acto colectivo, una tendencia hacia la agudización del conflicto étnico. Se puede observar en los cortes de agua que realizaron las organizaciones indígenas, en los cierres del comercio, en el corte en muchos casos de la luz eléctrica, en la idea de bloquear los teléfonos. Todo eso va revelando que ya no solo se busca crear un espacio de apertura étnica; ahora es más evidente un espíritu de confrontación, y en muchos casos particularmente violenta. Estos hechos pueden revelar mejor la frustración



*Ecuador es uno de los países de América Latina que ha dado mayor cabida a la población indígena dentro del sistema político. Desde los años post-reforma agraria se produjo lo que yo he llamado **apertura étnica**. En nuestra hipótesis el ciclo de la apertura terminó en el Ecuador contemporáneo*

indígena ante el bloqueo a la movilización o ascenso social o, al menos, mejoras sociales de vida que estuvo viviendo. Fue parte de la apertura étnica y del rol del Estado anterior, el cambiar sus condiciones sociales y contribuir a lo que hemos denominado el acceso a la ciudadanía, es decir, a las ventajas ya adquiridas por otros sectores sociales, como los servicios públicos. Ahora, estas poblaciones indígenas, privadas de las posibilidades de continuar en el acceso, por razones económicas o el cambio del Estado, considera que los no-indígenas tienen las ventajas que ellas deberían también tener. Esta reproducción de la desigualdad o de la injusticia contrasta con la afirmación y convicción actuales de tener derechos.

Otro elemento que muestra el cierre del espacio étnico es la actitud de amplios sectores de los no-indígenas. En primer lugar, de la elite costeña, que se lanzó a una gran campaña en contra de los indígenas; el gobierno lo hizo, en cambio, contra los dirigentes indígenas. Pero, en segundo lugar, no fue solo de la elite costeña; en Quito, en otras radios que no fueran La Luna, se escuchaban quejas "contra los indios" como, por ejemplo, que "no tenían derecho a cortar las vías", que "ya basta". No hay que olvidar tampoco que Ecuador sale de un largo período de crisis y movilizaciones con la caída de Mahuad. La reacción de la gente es de cansancio frente a todos estos hechos. No podemos seguir de la misma manera, parecería decir una opinión generalizada.

Se pueden mencionar varios ejemplos reveladores del fenómeno de cierre de la apertura étnica. Jorge Peña Triviño, ex-vicepresidente, por ejemplo, caracterizado por ser más bien moderado, al menos en relación a otros miembros de la elite guayaquileña, se preguntaba en su programa de televisión:

"¿vamos los mestizos a soportar que los indígenas impongan presidente, que violen nuestros derechos humanos cerrando las carreteras, impidiendo que lleguen los alimentos, quieren que un grupo de improvisados nos digan lo que hay que hacer, que tienen odio y se les nota?".

El Presidente de la Cámara de Industriales de Guayaquil, Francisco Alarcón, fue mucho más directo, como revelan algunas de sus frases: "el gobierno debe cumplir con las leyes, abrir las carreteras de inmediato. No dejan trabajar, los derechos de ellos terminan donde empiezan los nuestros. Tienen capturada a la mitad del país. El gobierno está pagando una recompensa con el diálogo. El gobierno no tiene fuerzas para lo que tiene que hacer. Ellos quieren tomar el poder, ese es el fondo del problema. Mientras no saquen armas hay que cargarlos y llevarlos. Es muy simple. Ahora, hay gente que quiere medidas para recompensarles; son unos secuestradores, hay que aplicar la Ley y nada más. Para qué necesita el gobierno mediadores. Vargas estaba promoviendo la rebelión, es un flagrante delito, él y los demás deben ir a la cárcel" (entrevista de TV, canal 3). Son frases que no han sido comunes, pero que revelan una racionalización de la idea de que hay que cerrar el espacio de apertura étnica.

El cambio del rol de los militares

Los militares jugaron igualmente un protagonismo importante con la represión, un rol muy diferente al que predominó hasta recientemente. Nos limitamos aquí a subrayar un cambio de su rol institucional, que tiene que ver con las relaciones entre los militares y los indígenas. Al haber desplegado el gobierno una política represiva, se ha producido un

corte de lo que he llamado la alianza indígena-militar. No es una alianza en el sentido de un discurso, de un compromiso explicitado, pero es una práctica. Si no fuera por esa alianza, no serían comprensibles todas las movilizaciones de los últimos años, con o sin indígenas -recuerden que es el país con el mayor número de huelgas nacionales de América Latina- cuyos efectos, entre otros, ha sido frenar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Esto no es un azar, no se debe solo a la fuerza ni a la capacidad organizativa, primero del FUT y los sindicatos, y luego de los indígenas, es el sistema político ecuatoriano que lo permite.

Las fuerzas armadas han jugado un rol de garantes del Estado que integra las diversidades sociales, étnicas y regionales. En 1990, con el primer levantamiento, o en 1994, cuando se planteó la renegociación de la Ley Agraria y el país estuvo paralizado diez días, con Duran Ballén en una similar postura a la del actual gobierno, los presidentes tuvieron que modificar sus posiciones. Los militares de toda evidencia jugaron un rol al respecto. Nada se podría entender en el caso ecuatoriano sin el rol y el peso de los militares. Lo que hemos vivido en estos días marca un cambio de esa alianza evidente y notoria. Se puede decir que se pasó un límite de lo que era admisible en el uso de la fuerza, que son las muertes, con lo cual se crea una nueva polarización contra los militares. A mi modo de ver, es el inicio de una ruptura clave que explica muchas de las características actuales del sistema político ecuatoriano.

El jacobinismo y el sistema político

A pesar de las polarizaciones, terminó por funcionar la tradición de negociación del sistema político ecuatoriano. A pesar de sus posiciones primeras, el gobierno acabó sentado en una misma mesa con los dirigentes campesinos e indígenas. La dirigencia costeña del actual gobierno debió rever su idea que la protesta se resolvía con firmeza por medio de la represión. Esta posición, lejos de atenuarla, la atizó, y con ella las polarizaciones conflictivas. Algo similar ocurre con las posiciones y ciertas orientaciones de los dirigentes indígenas. En algunos de estos predomina una concepción "jacobina" del poder y

de los cambios sociales, propia de la izquierda tradicional latinoamericana. Es la tesis de que se puede cambiar de gobierno "cuando queramos", "sacar a los malos" o "vamos a ganar si queremos"; cuando sabemos muy bien que se trata de un sistema, no de un cambio de personas, y que habría que construir más bien alternativas a ese sistema. Sin embargo, luego de los exitosos actos de protesta anterior, en algunos dirigentes indígenas es predominante esta idea. Este peso jacobino modifica o causa un problema en la idea de construir lo alternativo y acelera el conflicto étnico y general.

Conclusiones

Este acto colectivo ha permitido recuperar la legitimidad pública de las organizaciones indígenas, venida a menos luego del golpe de Estado de hace un año. Otra vez, el tema indígena está en la agenda política por presión de un acto colectivo, como lo está igualmente, en el continente, en particular en Bolivia y Guatemala, siguiendo otros caminos. En todos los casos, y es notorio en el caso del Ecuador, nos encontramos con una nueva camada de dirigentes que han rebasado el clásico problema de tierras y comunidades, y se centran en los procesos de participación ciudadana y acceso a derechos colectivos.

En cambio, el acto de protesta ha contribuido a acelerar los procesos de confrontación y conflictividad en el país. Parece previsible que si la polarización se incrementa tanto al nivel de los blanco-mestizos como de los indígenas, eso va a provocar una polarización regional más fuerte, puesto que la costa está promoviendo la idea de que se frene el proceso de apertura indígena. Además, hay una voluntad de tomar distancia completamente de la sierra.

Existe una pérdida de referentes de pertenencia interna en un país en el que se pierde cohesión. La movilización indica una crisis general del Ecuador, en nuestro criterio, sobre todo de sus pautas de equilibrios regionalizados, a más del vacío dejado por haber bruscamente reducido e inclusive borrado el Estado. Los actos revelan que cada cual tiene sus posiciones y exigencias sin que el Estado pueda tratarlas ni ofrecer respuestas. En la negociación, ni el gobierno ni los indígenas tenían reales posiciones, pues estas estuvieron supeditadas al peso de la



La protesta es polisémica; si se acompaña del reconocimiento a sus razones y de su pertinencia, bien puede cimentar los significados de lo adquirido. El acto colectivo de la protesta puede ser racionalizado para lograr que el sistema político se vuelva mucho más incluyente; podría muy bien servir para diseñar un proyecto de democracia

globalización, encarnada en la determinante de la situación dada por las condicionantes del FMI; el margen de maniobra era reducido.

La movilización revela que los conflictos socio-políticos y sociales al nivel local son particularmente fuertes y muestran también el vacío de poder actual del Estado y la crisis de legitimidad de la autoridad.

Ecuador, que ha vivido varios actos colectivos como el que termina, tiende a desperdiciarlos al no poner de relieve lo que estos construyen con sus actores, en particular frente al pasado que se tiende a borrar y a la integración política que construyen. En todas partes, los movimientos sociales, y en especial los actos colectivos en la vida pública, tienen significados profundos para la gente que participa en ellos. La protesta es desde luego polisémica, pero si se acompaña del reconocimiento a sus razones y de su pertinencia, bien puede cimentar los significados de lo adquirido, por ejemplo, en este caso podría sobresalir la identidad de los ecuatorianos proveniente de su sistema político.

La protesta ha terminado de un modo como no lo haría en otros países, con una negociación formalizada, con el gabinete en pleno discutiendo con organizaciones campesinas e indígenas, con un convenio firmado. Esto podría servir para ratificar que la negociación es parte del sistema político ecuatoriano, a pesar de su crisis y cambios. Por consiguiente, el acto colectivo de la protesta puede ser racionalizado para lograr que el sistema político se vuelva mucho más incluyente. De la misma forma, los actos colectivos podrían muy bien servir para diseñar un proyecto de democracia, si se reconociera sus logros y efectos positivos. Han permitido desde luego que los excluidos de ayer avancen en las pautas de reconocimiento público y de su constitución como sujetos. A pesar de las polarizaciones, estos actos refuerzan la construcción ecuatoriana de comunidad política al volver a los excluidos parte del sistema político. Es con la solución del conflicto y la interlocución con el Estado que se va construyendo esta nueva comunidad política en Ecuador.